

## Aguar la fiesta

Por: Martha Cecilia García. Investigadora de CINEP.

Con colaboración de Ana María Joven, pasante Pontificia Universidad Javeriana.

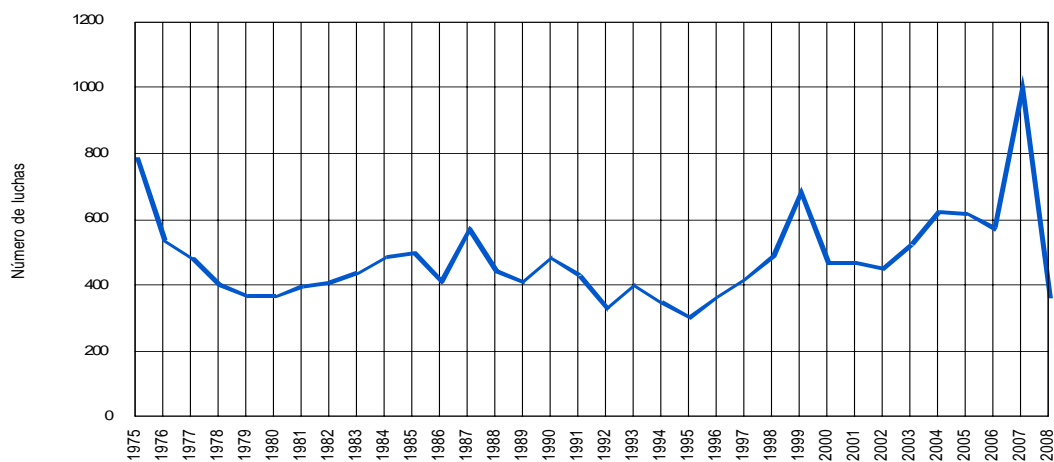
[mcgarcia@cinep.org.co](mailto:mcgarcia@cinep.org.co)

*“Abrir los ojos para encontrarse de golpe en la aburrida realidad”<sup>1</sup>*

**E**N medio de tanto regocijo nacional e internacional por las recientes manifestaciones multitudinarias en contra de las FARC y del secuestro y para derrochar alegría con la operación jaque, hablar del resto de movilizaciones sociales acaecidas en el país es aguardar la fiesta: Colombia no despertó ni el pueblo habló por primera vez el 4 de febrero o el 20 de julio de este año, y todavía está por verse si las marchas sirven, si sus ecos dejan de caer en oídos sordos, si las voces desarmadas que se expresan en todas las marchas son bienvenidas.<sup>2</sup>

Como lo muestra en la Gráfica 1,<sup>3</sup> la movilización social en el país ha venido creciendo en los últimos años, en un porcentaje que excede el de la popularidad del actual presidente, y dobla a aquel que corresponde a quienes consideran que “Colombia es el país más feliz de América Latina”.<sup>4</sup>

Gráfica 1  
Comportamiento de las luchas sociales en Colombia



1 de enero de 1975 - 30 de junio de 2008

<sup>1</sup> “La hermana de Alicia estaba sentada allí, con los ojos cerrados, y casi creyó encontrarse ella también en el País de las Maravillas. Pero sabía que le bastaba volver a abrir los ojos para encontrarse de golpe en la aburrida realidad...”. Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas*.

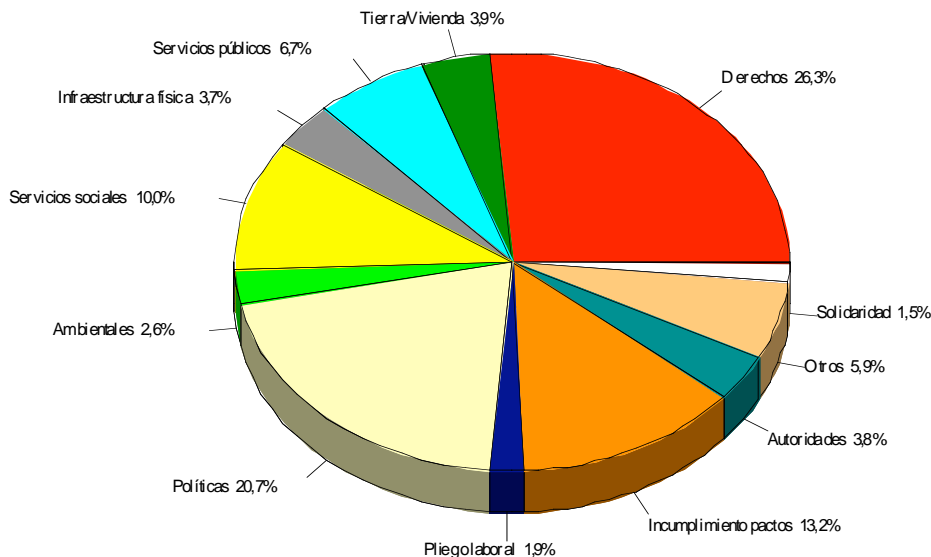
<sup>2</sup> Referencia a titulares de prensa con ocasión de aquellas dos marchas.

<sup>3</sup> Las cifras que aquí se presentan provienen de la Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep, que se alimenta a partir de la lectura y análisis sistemático de información recolectada en periódicos nacionales y regionales, noticieros radiales y de televisión y boletines de organizaciones sociales.

<sup>4</sup> Según encuesta realizada por Invamer Gallup, publicada por medios masivos de comunicación el 21 de noviembre de 2007.

En 2007 las luchas sociales alcanzaron el mayor número registrado entre 1975 y 2008 y esta efervescencia se concentra en el primer año del segundo mandato de Uribe Vélez (7 de agosto de 2006 a 6 de agosto de 2007). ¿Qué ha motivado tanta insatisfacción ciudadana en este segundo mandato recubierto de tanta euforia reeleccionista? La Gráfica 2 da algunos indicios para hallar respuestas.

**Gráfica 2**  
**Motivos de las luchas sociales en Colombia**



**7 de agosto de 2006 – 30 de junio de 2008**

En primer lugar, la permanente lucha *contra* la violación de derechos y *por su afirmación*, abanderada por la reivindicación de los derechos a la vida, la integridad y la libertad y en protesta contra las infracciones al derecho internacional humanitario. La petición incesante hecha por las organizaciones de víctimas del conflicto armado<sup>5</sup> de que muchas de ellas puedan retornar a las parcelas de las cuales fueron desterrados o de que sus familiares secuestrados o desaparecidos sean devueltos a la libertad y con vida, y puedan obtener verdad, justicia y reparación, se expresa mayoritariamente en los plantones semanales y mensuales que realizan en diversas ciudades del país, con la esperanza de ser escuchadas, tanto por los actores armados irregulares como por el gobierno nacional. En los últimos años, de la súplica han pasado a exigir un acuerdo humanitario entre las partes (gobierno-guerrilla) y han rechazado rotundamente el rescate militar, aún después de la exitosa operación jaque. A estas voces se han sumado las de pobladores urbanos, estudiantes, asalariados y mujeres. Indígenas y campesinos han denunciado continuamente, durante los últimos 23 meses, asesinatos, torturas, desapariciones de compañeros y vecinos acusados de pertenecer a la guerrilla, tras acciones militares en cercanías a sus lugares de habitación y han protestado por el confinamiento y otras violaciones de sus derechos en razón de la dinámica de la guerra.

La exigencia por el respeto a los derechos civiles y políticos ha sido una demanda de diversos sectores sociales, pero cabe resaltar que los reclusos siguen exigiendo

<sup>5</sup> Su composición es fundamentalmente femenina y han venido aumentando en número y en capacidad de expresión pública, hasta liderar el 21% de las luchas del periodo observado, no obstante la persecución, y las burlas que han sufrido en sus exigencias.

la protección de aquellos derechos que no pueden inculcarse ni siquiera en situaciones de privación de libertad. La mejora de las condiciones carcelarias, el derecho a recibir atención médica, al debido proceso y a la igualdad frente a algunos beneficios concedidos a guerrilleros y paramilitares han estado entre las peticiones hechas por quienes permanecen detenidos en centros penitenciarios del país.

Indígenas, afrocolombianos y raizales han sido los principales protagonistas de las luchas sociales en las cuales se ha exigido reconocimiento, respeto y protección a sus autoridades y formas de autogobierno tradicionales, a sus concepciones y prácticas de salud, educación y justicia propias, a sus territorios ancestrales, todos los cuales han sido desconocidos, cuando no negados, tanto por medidas legislativas –como la Ley Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural–, como por proyectos agroindustriales, hidroeléctricos o energéticos emprendidos o propuestos por el gobierno nacional, empresas nacionales y multinacionales en sus territorios, sin consulta previa y en desmedro de sus condiciones culturales, económicas y ambientales.

El derecho a la organización sindical y a la huelga, así como el castigo a quienes apoyan, financian y realizan acciones en contra de la vida y las actividades de los asalariados han sido reivindicaciones centrales en las protestas encabezadas por organizaciones sindicales que, contra la idea de que han perdido vigencia, lideraron el 29% de las luchas de este segundo gobierno de Uribe Vélez.

Entre los derechos colectivos, el derecho a la paz es central<sup>6</sup> pero el derecho a no ser discriminados como colectivo social es motivo de movilización y denuncia permanente de mujeres, del sector LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) y de grupos étnicos. Los dos primeros rechazan que se les convierta en objeto sexual u objetivo militar y los afrocolombianos siguen denunciando la segregación racial y la violencia simbólica cotidiana ejercida contra ellos.<sup>7</sup>

El segundo motivo de protesta ciudadana lo ocupan las políticas, entre las que se destacan las referidas a aspectos del manejo gubernamental del conflicto armado interno: la preponderancia otorgada al rescate militar de los secuestros sobre el acuerdo humanitario, el desconocimiento de la tragedia de los desaparecidos y de sus familiares, la segregación e invisibilidad con que se marca a la población en

<sup>6</sup> Más en Colombia que, si nos atenemos al Índice Global de Paz 2008, es el país más violento de América Latina y el décimo que ostenta tal categoría en el mundo (*Radio Santafé*, 21 de mayo de 2008).

<sup>7</sup> Unos pocos ejemplos para ilustrar que la “pureza de raza” sigue siendo central en la jerarquización social en el país: “Racismo en discotecas? Bares se defienden: ‘Porque devolvemos una vez en un año a cuatro negros hay una denuncia’”, titular en *El Tiempo*, 18 de mayo de 2008, págs. 2-4. “[El tal Tino Asprilla] **de ser un negrito superado y simpaticón**, querido y alabado por su pueblo pasó a convertirse en una pesadilla moral y social...”, *El Espectador*, 18 de julio de 2008, pág. 30. Junto a esta columna, apareció otra, que señala: “...‘Ah, como yo no creo en los computadores de Raúl Reyes’ –dice [la senadora Piedad Córdoba] para darse aliento–. **Su raciocinio es mero realismo mágico (...) Puro y simple pensamiento salvaje**, como lo registró Claude Lévi-Strauss. Para ella, la realidad es prolongación o tentáculo o reflejo de su pensamiento, no al revés...”. Mis negrillas llaman la atención sobre el lenguaje racista y sexista que se utiliza como soporte argumentativo de diversos temas, o como base de un tipo de humor de doble sentido que, como lo criticó el Secretario de Cultura de Medellín, se **burla de mujeres, homosexuales o discapacitados**. La polémica desatada recientemente por este funcionario en el evento Humor City de Medellín, se ha desentendido del núcleo central de la crítica: la existencia de un humor facilista que ridiculiza a ciertos sectores sociales y desconoce la violencia simbólica que ello acarrea.

situación de desplazamiento<sup>8</sup> –en contraste con los beneficios otorgados a los desmovilizados–; las detenciones masivas arbitrarias y el confinamiento al que están sometidas comunidades enteras en zonas de conflicto.

Las movilizaciones más concurridas y de mayor cobertura nacional contra políticas se dieron alrededor del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, *Estado Comunitario: Desarrollo para Todos*. Ellas mostraron que muchos sectores sociales no creen que este plan sea ‘el instrumento idóneo para lograr un desarrollo sostenible que beneficie a todos’ ni que ‘el Estado Comunitario garantice que la función del patrimonio público sea el servicio a la comunidad’ –menos aún cuando crecen las protestas en contra de la privatización del patrimonio público vendido a particulares o a transnacionales–, y se oponen a que el Estado deje en manos del sector privado la tarea de generar riqueza. Este plan y el proyecto de Ley de Transferencias, percibida como el recorte a la inversión en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, mantuvieron a trabajadores estatales, estudiantes, indígenas y campesinos en una constante movilización entre marzo y mayo de 2007. Este ciclo de protestas trajo a un primer plano a las renovadas organizaciones estudiantiles y sus alianzas con sindicatos de trabajadores y profesores que denunciaron las graves amenazas, contenidas en el Plan, contra la estabilidad financiera de las universidades públicas y la calidad académica de la educación superior en su conjunto.

Por su número, las protestas contra el incumplimiento pactos ocupa el tercer lugar en este período. Entre ellas sobresalen las que piden pago de salarios y prestaciones retrasadas, en su mayoría dirigidas contra entidades gubernamentales que se muestran como las mayores acreedoras ante sus trabajadores activos y pensionados. La continua violación de promesas y acuerdos gubernamentales son otro motor de protesta de quienes son defraudados. La toma del Parque de la 93 en Bogotá por desplazados, a mediados de junio de 2008, el segundo paro de camioneros de 2008, mítines y disturbios protagonizados por desmovilizados a lo largo del periodo observado, la campaña de liberación de la madre tierra emprendida por indígenas del Cauca,<sup>9</sup> entre otros muchos casos, ponen en evidencia que, desde el presidente<sup>10</sup> hacia abajo, los funcionarios gubernamentales violan permanentemente los acuerdos a los que se comprometen y, de otra parte, que en la memoria de organizaciones y actores sociales reposa la conciencia del incumplimiento estatal de sus obligaciones pendientes por lo que, buena parte de sus acciones colectivas, reclaman al Estado que no solo sea el veedor de la equidad –como reza en el PND 2006-2010– sino el garante del bienestar social.

<sup>8</sup> Recuérdese el caso Carimagua frente al cual, una senadora liberal señaló que el gobierno o había sido irresponsable, al haberlo presentado oficialmente en 2004 ante empresarios japoneses en Tokio como una alternativa de desarrollo agroecológico para la Orinoquia, o un gran mentiroso, porque en febrero de 2008, el Ministro de Agricultura dijo que sus tierras no eran aptas para desplazados porque requerían una inmensa inversión que el Gobierno no podía hacer (“Carimagua: una dolorosa señal”, columna de la senadora Cecilia López Montaña, consultada en abc.senado.gov.co). Otras muestras de invisibilidad: el 4 de agosto de 2008, *Caracol Noticias* informó que al gobierno nacional se le habían perdido un millón de desplazados para incorporarlos al programa Familias en Acción y días antes el (ex)canciller Fernando Araújo había sentenciado que “el desplazamiento no se puede medir”, *El Espectador*, 19 de junio de 2008, pág. 7.

<sup>9</sup> “El 11 de junio de 2008 el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que las comunidades indígenas son penetradas por las Farc” (*elpais.com.co*, 14 de junio de 2008). “Ejército asegura que tras acciones nativas catalogadas como resistencia civil se esconde una peligrosa alianza con las Farc (*El País*, 8 de junio de 2008, pág. 14).

<sup>10</sup> En la noche del 16 de junio –cuando se llevó a cabo el primer paro camionero del año–, el propio presidente y los ministros de transporte y hacienda llegaron a algunos acuerdos con la ACC, los mismos que fueron incumplidos y ocasionaron el paro de agosto de 2008.

Una cuarta parte de las luchas sociales del segundo gobierno del presidente Uribe exigen de las autoridades nacionales, departamentales y municipales la satisfacción de necesidades referidas a condiciones de vida y hábitat dignos, es decir, demandan servicios sociales, tierra y vivienda, infraestructura física, servicios públicos y ambiente sano. El Plan Plurianual de Inversiones del actual PND dice destinar el 57,4% de sus recursos a los sectores de ambiente, vivienda y desarrollo (9,0%), educación (19,9%), protección social (19,0%) y transporte (9,5%).<sup>11</sup> Loable propuesta borrada de un plumazo con la insistencia presidencial de gastarse el presupuesto del país pagando recompensas.<sup>12</sup>

Buena parte de las protestas contra diversas autoridades denuncia la corrupción de funcionarios públicos, lo que deja al descubierto la vacuidad del discurso oficial sobre la transparencia en la administración pública.

Si unos cuantos creen vivir en el País de las Maravillas de José Obdulio,<sup>13</sup> donde no hay conflicto armado, pero sí un posconflicto, donde no hay rastros de paramilitarismo (en lo que le cabría algo de razón al asesor presidencial tras la extradición de los jefes) y las águilas negras son una invención de unos cuantos que se autoamenazan, donde no hay desplazados sino migrantes y donde el genocidio de la UP fue otro invento de unas supuestas víctimas y sus abogados para ganarse cuantiosas sumas de dólares, los indicios que tenemos sobre los motivos de la protesta ciudadana en el país muestran que gentes del común denuncian colectivamente y en el espacio público injusticias, insatisfacciones y desacuerdos y mantienen abiertos los ojos porque se encuentran a diario en la *aburrida* realidad.

---

<sup>11</sup> Libardo Sarmiento, "El financiamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007–2010", en *Caja de Herramientas*, N° 121, Bogotá, marzo de 2007.

<sup>12</sup> Afirmación hecha por Uribe Vélez durante un consejo comunal en Morelia, Caquetá (*El Espectador*, 15 de julio de 2008, pág. 27).

<sup>13</sup> Ver "El país según José Obdulio" en *Cambio*, N° 798, 14 a 20 de agosto de 2008, págs. 18 a 23.